

DECRETO 531/16

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016

B.O.: 31/3/16

Vigencia: 31/3/16

Régimen de promoción. Energía eléctrica. Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía. Beneficios tributarios. Impuestos al valor agregado y a las ganancias. Adquisición de bienes de capital. Impuesto a la ganancia mínima presunta. Reglamentación de la [Ley 26.190](#). [Dto. 562/09](#). Su derogación.

Art. 1 – Apruébase la reglamentación de la Ley 26.190, modificada por el Cap. I de la Ley 27.191, y del Cap. II de la Ley 27.191 sobre “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica” que, como Anexo I, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – Apruébase la reglamentación de los Caps. III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley 27.191 sobre “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica” que, como Anexo II, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3 – Deróganse el Dto. 562, de fecha 15 de mayo de 2009, y la Res. Conj. M.P.F.I.P. y S. 572 y M.E. y F.P. 172, de fecha 2 de mayo de 2011.

Art. 4 – El presente decreto comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5 – De forma.

ANEXO I - Reglamentación de la Ley 26.190, modificada por el Cap. I de la Ley 27.191, y del Cap. II de la Ley 27.191 sobre “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica”

Reglamentación de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191

Artículo 1 – El Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Energía y Minería, fomentará el desarrollo de emprendimientos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía con destino a la prestación del servicio público de electricidad, la investigación para el desarrollo tecnológico y la

fabricación de equipos con esa finalidad. El Ministerio de Energía y Minería coordinará con los organismos dependientes de la Administración centralizada y descentralizada las acciones que correspondan a sus respectivas competencias para hacer efectivas las políticas de fomento que se establecen en la Leyes 26.190 y 27.191 y en esta reglamentación.

Artículo 2 – El Ministerio de Energía y Minería calculará y publicará el grado de cumplimiento de la meta establecida en el art. 2 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191. A tales efectos, utilizará datos públicos oficiales de elaboración propia o confeccionada por otros organismos o entidades reconocidas por la autoridad de aplicación. Deberá incluir en el cómputo la generación de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables enumeradas en el art. 4 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la última ley mencionada.

El Ministerio de Energía y Minería, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas conducentes a efectos de alcanzar el objetivo previsto por el art. 2 de la Ley 26.190, modificado por la Ley 27.191.

Artículo 3 – La Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, es de aplicación a todas las inversiones en generación de energía eléctrica, autogeneración y cogeneración, a partir del uso de fuentes de energía renovables en todo el territorio nacional, sean éstas nuevas plantas de generación o ampliaciones y/o repotenciaciones de plantas de generación existentes, realizadas sobre equipos nuevos o usados, según la normativa que dicte oportunamente el Ministerio de Energía y Minería.

Se considerará obra nueva para la producción de energía eléctrica, a partir de fuentes renovables, a los bienes de capital nuevos, obras civiles, electromecánicas y de montaje y otros servicios vinculados que la integren y conformen un conjunto inescindible en lo atinente a su aptitud funcional para la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables que se definen en el art. 4 de la Ley 26.190, modificado por la Ley 27.191. Únicamente quedarán alcanzados por los beneficios promocionales aquellos titulares de proyectos de inversión que efectúen la incorporación de bienes nuevos, sin perjuicio de que dichos proyectos puedan desarrollarse sobre instalaciones existentes.

Artículo 4 – A los efectos de la aplicación del “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica” (en adelante, el “Régimen de fomento de las energías renovables”), se establece que:

a) La autoridad de aplicación podrá disponer, sobre bases técnicamente fundadas, la inclusión de otras fuentes renovables que en el futuro se desarrollen, siempre que sean fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo.

b) Sin reglamentar.

c) Sin reglamentar.

d) Sin reglamentar.

Artículo 5 – Será autoridad de aplicación de la Ley 26.190, modificada por Ley 27.191, el Ministerio de Energía y Minería, conforme lo establece la Ley de Ministerios (t.o. por Dto. 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones y complementarias, quien podrá delegar el ejercicio de sus competencias en una dependencia de rango no inferior a Subsecretaría.

En las cuestiones de índole tributaria y fiscal el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas tendrá las siguientes funciones:

a) Dictará las reglamentaciones técnicas de orden fiscal y tributario, sin perjuicio de las competencias propias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

b) Determinará el cupo anual máximo a prever en el presupuesto nacional disponible para otorgar beneficios promocionales, sobre la base de la estimación que anualmente realice la autoridad de aplicación en función de los proyectos de inversión a desarrollar para alcanzar el objetivo fijado en el art. 2 de la Ley 26.190, modificado por la Ley 27.191.

c) Previsionará el cupo anual de beneficios promocionales y gestionará su inclusión en la ley de presupuesto del año fiscal siguiente, de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior.

En caso de que el cupo correspondiente a cada período no sea utilizado en su totalidad, la autoridad de aplicación adoptará las medidas necesarias para que el excedente se traslade como saldo adicional al período siguiente.

Políticas

Artículo 6 – a) La autoridad de aplicación coordinará con las jurisdicciones provinciales que adhieran al “Régimen de fomento de las energías renovables”

aspectos tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y el cumplimiento de las metas de participación futura en el Mercado de dichos recursos energéticos, con el fin de que se aprovechen las ventajas relativas de los recursos locales. Para ello, las jurisdicciones adherentes asumirán el compromiso de suministrar a la autoridad de aplicación toda la información que le sea requerida.

b) La autoridad de aplicación definirá las condiciones bajo las cuales llevará a cabo la coordinación de las actividades en el marco de lo dispuesto por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 25.467.

c) Sin reglamentar.

d) Sin reglamentar.

e) Sin reglamentar.

f) Sin reglamentar.

Artículo 7 – La autoridad de aplicación deberá definir parámetros que permitan seleccionar, aprobar y merituar proyectos de inversión en obras nuevas para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, teniendo en cuenta como objetivos lograr una mayor diversificación de la matriz energética nacional, la expansión de la potencia instalada, la reducción de costos de generación de energía, la contribución a la mitigación del cambio climático y la integración del componente nacional en los proyectos a desarrollarse.

Beneficiarios y procedimiento

Artículo 8 – 8.1. Beneficiarios: podrán acceder al “Régimen de fomento de las energías renovables”, establecido en los arts. 7 y ss. de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, las personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en la República Argentina que sean titulares de proyectos de inversión, incluidos los proyectos de autogeneración y cogeneración y/o concesionarios de obras nuevas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, siempre que: i. no hayan celebrado contratos bajo las Res. S.E. 220, de fecha 18 de enero de 2007; 712, de fecha 9 de octubre de 2009, y 108, de fecha 29 de marzo de 2011, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el mismo proyecto presentado para acceder al citado “Régimen de fomento de las energías renovables”, pudiendo, en cambio, acceder en el caso de que dicho proyecto no haya comenzado a ser construido y el contrato celebrado bajo las resoluciones mencionadas sea dejado sin efecto en las

condiciones establecidas por la autoridad de aplicación y ii. hayan sido seleccionados y aprobados por la autoridad de aplicación para ser incluidos en el “Régimen de fomento de las energías renovables” y obtenido, en consecuencia, el certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de energías renovables”.

Los sujetos alcanzados por lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 27.191, que desarrollen proyectos de inversión de autogeneración o cogeneración de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con el fin de cumplir con la obligación impuesta en la citada norma, también podrán ser beneficiarios del “Régimen de fomento de las energías renovables” de acuerdo con las condiciones establecidas por la autoridad de aplicación.

Los titulares de proyectos de inversión respecto de los cuales se hayan celebrado contratos bajo las resoluciones citadas precedentemente, que hayan comenzado la etapa de construcción, podrán ser beneficiarios del “Régimen de fomento de las energías renovables” siempre que acepten las modificaciones a los contratos celebrados que resulten necesarias para adaptarlos a los términos de las Leyes 26.190 y 27.191, del presente decreto, y de las normas complementarias que en consecuencia se dicten, de acuerdo con lo que establezca la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación deberá establecer un orden de mérito para los proyectos que hayan sido aprobados.

En caso de que la sumatoria de los beneficios promocionales a otorgar a los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación exceda el cupo fiscal previamente establecido al efecto, dicho orden de mérito deberá ser tenido en cuenta para la asignación de dichos beneficios, dando prioridad a los proyectos con mejor calificación.

A efectos de elaborar el orden de mérito de los proyectos aprobados, la autoridad de aplicación establecerá las pautas, los puntajes y los porcentajes de ponderación correspondientes.

8.2. Procedimiento: para obtener el certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de las energías renovables”, y la asignación de los beneficios promocionales, los interesados deberán presentar ante la autoridad de aplicación la documentación que ésta requiera oportunamente.

La autoridad de aplicación podrá intercambiar información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y otros órganos y entes competentes en las

materias involucradas, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

En los casos de los proyectos cuya fuente renovable de generación sean residuos, independientemente de la tecnología empleada, la autoridad de aplicación dará intervención al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a los fines de que emita opinión sobre la elegibilidad del proyecto, en lo relativo a las materias propias de su competencia.

Asimismo, la autoridad de aplicación deberá dar intervención al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en los expedientes administrativos, previo al otorgamiento del beneficio, a efectos de que la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas tome la intervención que le compete, a fin de evaluar la afectación presupuestaria que implique el otorgamiento de los beneficios previstos en el presente régimen.

La autoridad de aplicación realizará la selección, evaluación y aprobación de los proyectos de generación presentados, mediante acto administrativo fundado, estableciendo el orden de mérito según lo establecido en el art. 8.1 de la presente reglamentación. De acuerdo con el orden de mérito aprobado, la autoridad de aplicación determinará la asignación de los beneficios promocionales para cada proyecto, incluyendo el detalle de los bienes a importar alcanzados por el beneficio previsto en los arts. 14 de la Ley 27.191 y 14 del Anexo II del presente decreto, consignando el monto del cupo fiscal total asignado a cada uno.

Los proyectos de generación aprobados quedarán incluidos en el “Régimen de fomento de las energías renovables” y obtendrán un certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de energías renovables” que será extendido por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación establecerá los requisitos y formalidades relativas a la presentación de las solicitudes, la calificación para la asignación del cupo fiscal y dictará las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para el cumplimiento del régimen instituido por la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191.

La presentación de la solicitud para ser incluido en el “Régimen de fomento de las energías renovables” implicará de parte del solicitante el pleno conocimiento y aceptación de las normas que integran el citado régimen.

Beneficios

Artículo 9 – El goce de los beneficios promocionales otorgados mediante el acto administrativo de aprobación del proyecto quedará sujeto a la condición suspensiva consistente en la acreditación, por parte del beneficiario, de que el proyecto haya tenido principio efectivo de ejecución antes de la fecha estipulada en el art. 9 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191. La autoridad de aplicación establecerá la documentación a presentar para cumplimentar con la acreditación exigida y los medios para hacerlo, tendiendo a la utilización de medios electrónicos en todo cuanto sea posible.

La autoridad de aplicación dictará las normas complementarias e interpretativas necesarias para una mejor aplicación del presente régimen, pudiendo contemplar situaciones de imposibilidad objetiva de completar el principio efectivo de ejecución dentro del plazo previsto cuando existan fundadas razones que lo justifiquen.

La falta de acreditación del cumplimiento del principio efectivo de ejecución del proyecto en el plazo correspondiente dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 10 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, y 10 del presente anexo.

En el momento de otorgamiento de los beneficios, sea al acreditar el principio efectivo de ejecución o en forma anticipada, el beneficiario deberá constituir una garantía equivalente al ciento por ciento (100%) del monto total de beneficios asignados al proyecto, más el monto adicional por otros conceptos que pudieran corresponder, en los términos que establezca la autoridad de aplicación.

El Certificado Fiscal previsto en el art. 9, inc. 6, de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, podrá otorgarse en forma anticipada de acuerdo con lo establecido en el inc. 6 del presente artículo.

A los efectos de la aplicación de los beneficios promocionales previstos en el art. 9 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, se establecen las siguientes disposiciones:

1. Impuesto al valor agregado (I.V.A.) e impuesto a las ganancias: de conformidad con lo establecido en el art. 9, inc. 1, de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, los sujetos titulares de proyectos aprobados en el marco de las disposiciones de dicha ley podrán obtener la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (I.V.A.), correspondiente a los bienes nuevos incluidos en el proyecto y, simultáneamente, practicar en el impuesto a las ganancias la amortización acelerada de los mismos.

I. Devolución anticipada del impuesto al valor agregado (I.V.A.): el impuesto al valor agregado (I.V.A.) que por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, nuevos en todos los casos, o la realización de obras de infraestructura, les hubiera sido facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurrido como mínimo un período fiscal contado a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas inversiones, le serán acreditados contra otros impuestos recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) o, en su defecto, les será devuelto en las condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.).

Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de las actividades.

A los fines establecidos en el presente apartado, se considerarán inversiones realizadas a aquellas que correspondan a erogaciones de fondos efectuadas a partir de la fecha de aprobación del proyecto, de conformidad con los plazos establecidos en el mismo.

Cuando los bienes a los que se refiere el presente punto se adquieran en los términos y condiciones establecidos por los arts. 1227 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán computarse a los efectos de este régimen luego de haber transcurrido como mínimo un período fiscal, contado a partir de aquél en que se haya ejercido la citada opción.

No podrá realizarse la acreditación prevista en este régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros o de su actuación como agentes de retención o percepción. Tampoco será aplicable la referida acreditación contra gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica ni contra deudas correspondientes al Sistema de la Seguridad Social.

El impuesto al valor agregado (I.V.A.), correspondiente a las inversiones a que hace referencia el tercer párrafo del presente apartado, se computará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.

No procederá la acreditación o devolución a que se refiere el presente apartado, según corresponda, cuando al momento de su solicitud los respectivos bienes de capital no integren el patrimonio de los titulares del proyecto.

II. Amortización acelerada del impuesto a las ganancias: los sujetos titulares de proyectos promovidos en el marco de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, por las inversiones correspondientes a dichos proyectos efectuadas con posterioridad a su aprobación y de conformidad con los plazos que allí se establezcan, podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas previstas en los arts. 83 y 84 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997) y sus modificaciones, o conforme al régimen establecido en el art. 9, apart. 1.4, de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191.

Cuando se trate de operaciones que den derecho a la opción prevista en el art. 67 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997) y sus modificaciones, la amortización especial establecida en el art. 9, apart. 1.4, de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, deberá practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en la norma legal citada en primer término. Si la adquisición y la venta se realizaran en ejercicios fiscales diferentes, la amortización eventualmente computada en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo correspondiente al período de dicha enajenación.

El tratamiento especial previsto en el presente apartado queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del titular del proyecto de que se trate durante tres años contados a partir de la fecha de habilitación del bien, entendiéndose por tal aquella a partir de la cual se encuentra ejecutado el proyecto y en etapa de producción o funcionamiento, una vez finalizado el período de pruebas y puesta a punto. De no cumplirse esta condición corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias de impuestos resultantes con más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el párrafo siguiente.

No se producirá la caducidad del tratamiento señalado precedentemente en el caso de reemplazo de bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el monto invertido en la reposición sea igual o mayor al obtenido por su venta.

Cuando el importe de la nueva adquisición fuera menor del obtenido en la venta la proporción de las amortizaciones computadas que, en virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el "Régimen de fomento de las energías

renovables”, tendrá el tratamiento indicado en la parte final del tercer párrafo del presente apart. II.

El concepto “ampliación de la capacidad productiva de los proyectos existentes”, previsto en el último párrafo del pto. 1.4 del art. 9 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, incluye repotenciones, reemplazos, mejoras de eficiencia y otras similares.

2. Compensación de quebrantos con ganancias: sólo podrán compensarse las pérdidas originadas en la realización de la actividad promovida por el “Régimen de fomento de las energías renovables” contra las utilidades netas resultantes de dichas actividades.

Los beneficiarios de este régimen que desarrollen actividades distintas a las alcanzadas por éste deberán llevar su contabilidad de manera tal que permita la determinación y evaluación en forma separada de la actividad promovida del resto de las desarrolladas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) reglamentará la instrumentación de este beneficio.

3. Impuesto a la ganancia mínima presunta: a los fines de lo dispuesto en el inc. 3 del art. 9 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, los bienes que no integrarán la base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta son los afectados al proyecto promovido e ingresados al patrimonio de la empresa titular del mismo con posterioridad a la fecha de su aprobación.

4. Deducción de la carga financiera del pasivo financiero: los beneficiarios del presente régimen podrán exponer contablemente, como nota explicativa, los importes de los intereses y de las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto. En lo que hace a su tratamiento impositivo, se estará a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 1997, y sus modificaciones y de acuerdo con las limitaciones allí contempladas.

5. Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades: el citado beneficio será aplicable en la medida que los dividendos o utilidades sean reinvertidos en un nuevo proyecto de infraestructura en el país, en el plazo y demás condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

6. Certificado Fiscal: no se incluirán en el cómputo del componente nacional los costos de transporte y montaje de equipamiento.

La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento por el cual los beneficiarios podrán solicitar la emisión del Certificado Fiscal a partir de la entrada en operación comercial del proyecto de inversión.

La autoridad de aplicación determinará los requisitos y condiciones a cumplir y las garantías que deberá constituir el beneficiario en caso de solicitarse el otorgamiento del Certificado Fiscal con carácter previo a la entrada en operación comercial del proyecto y el alcance de dicho beneficio.

Dicha garantía será devuelta al beneficiario una vez acreditada la entrada en operación comercial del proyecto en el plazo previsto por la autoridad de aplicación. En caso de que el proyecto no comience su operación comercial en el plazo establecido al efecto en el acto de aprobación o en la prórroga que fundadamente se otorgue, o la autoridad de aplicación determinare el incumplimiento de la obligación de integración del componente nacional comprometido o de alguna otra obligación establecida como condición de vigencia del Certificado Fiscal, éste quedará cancelado sin necesidad de intimación previa alguna.

Una vez producida la entrada en operación comercial del proyecto y completada y acreditada fehacientemente la integración total del componente nacional comprometido, se otorgará un nuevo Certificado Fiscal por el porcentaje restante hasta completar el ciento por ciento (100%) del beneficio.

La autoridad de aplicación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), en forma conjunta, regularán las formas y condiciones de emisión, utilización y cesión del Certificado Fiscal y los efectos derivados de su cancelación cuando hubiere sido utilizado para el pago de impuestos, resguardando los derechos del cesionario si el beneficiario lo hubiere cedido.

No podrá utilizarse el Certificado Fiscal para cancelar obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros o de su actuación como agentes de retención o percepción. Tampoco será aplicable el referido instrumento para cancelar gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica ni deudas correspondientes al sistema de la Seguridad Social.

El beneficiario podrá ceder el Certificado Fiscal siempre que no registre deuda líquida exigible con la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.).

Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar convenios de colaboración con el Ministerio de Producción, con otros organismos del sector público nacional con

competencia en la materia y con las cámaras empresariales del sector industrial que considere conveniente, para establecer mecanismos de verificación y control del componente nacional integrado en el proyecto.

Para determinar la inexistencia de producción nacional aludida en el art. 9, inc. 6, de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, se tendrá en cuenta que dicha situación podrá configurarse cuando no exista producción nacional o, bien, cuando: i. ésta no se encuentre disponible en los tiempos y condiciones requeridas para cumplir los cronogramas de los proyectos; o ii. no reúna requisitos de calidad, técnicos y de confiabilidad mínimos según pautas nacionales o internacionales aceptables, según lo que establezca la autoridad de aplicación con la participación de los organismos públicos y entidades privadas mencionadas en el párrafo anterior.

7. El Banco de la Nación Argentina, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, dispondrá líneas de crédito especiales, de corto plazo y con tasa de interés diferencial, tendientes a financiar la cancelación del impuesto al valor agregado (I.V.A.) que deban abonar los beneficiarios del “Régimen de fomento de las energías renovables” durante la ejecución del proyecto y hasta su entrada en operación comercial. Los créditos otorgados en virtud de este inciso deberán cancelarse una vez efectivizadas las devoluciones anticipadas del impuesto al valor agregado (I.V.A.) o efectuada la acreditación o producida la absorción de los créditos fiscales correspondientes, de conformidad con lo previsto en el art. 9, inc. 1, apart. I, del presente anexo. Únicamente podrán acceder a estas líneas de crédito quienes hayan obtenido el certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de las energías renovables”.

Sanciones

Artículo 10 – El incumplimiento de los plazos de ejecución, de la puesta en marcha del proyecto o del resto de los compromisos técnicos, productivos y comerciales asumidos en la presentación que dio origen a la aprobación del proyecto y al otorgamiento de los beneficios promocionales dará lugar a la pérdida de dichos beneficios y al reclamo de los tributos dejados de abonar más sus intereses y actualizaciones y a la ejecución de las garantías constituidas.

El incumplimiento será resuelto mediante acto fundado por parte de la autoridad de aplicación, previo cumplimiento del debido proceso adjetivo mediante la aplicación de la Ley 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Dto. 1.759/72, t.o. en 1991, y será comunicado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) a los efectos de determinar la deuda e intimar su pago. No corresponderá respecto de los sujetos comprendidos el trámite establecido por los arts. 16 y ss. de

la Ley 11.683 (t.o. en 1998) y sus modif., sino que la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con la simple intimación de pago del impuesto y sus accesorios por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), sin necesidad de otra sustanciación.

Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) a dictar la normativa que resulte necesaria a los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente.

El término de la prescripción para exigir la restitución de los créditos fiscales acreditados o, en su caso, del impuesto a las ganancias y del impuesto a la ganancia mínima presunta, ingresado en defecto, con más los intereses y actualizaciones que pudieran corresponder, se regirá por lo previsto en los arts. 56 y 57 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998).

Artículo 11 – Sin reglamentar.

Artículo 12 – La autoridad de aplicación deberá definir los parámetros que ponderen la participación de elementos de producción local, así como los supuestos que deberán acreditarse cuando no existiere oferta tecnológica competitiva de nivel local, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

Artículo 13 – Todo interesado en participar en el “Régimen de fomento de las energías renovables” establecido por la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, deberá presentar una declaración jurada de renuncia o desistimiento a los beneficios establecidos en regímenes anteriores en el marco de la Leyes 25.019 y 26.360, conforme lo establezca la autoridad de aplicación. Los proyectos beneficiados por cualquiera de los regímenes mencionados precedentemente únicamente podrán presentarse para acceder al “Régimen de fomento de las energías renovables”, si a la fecha de su presentación no hubieren comenzado la ejecución de las obras comprometidas en los contratos celebrados.

El desistimiento o renuncia tendrá eficacia a partir de la efectiva incorporación del interesado en el “Régimen de fomento de las energías renovables”, mediante el otorgamiento del certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de las energías renovables”.

Artículo 14 – Sin reglamentar.

Artículo 15 – Sin reglamentar.

Reglamentación del Cap. II de la Ley 27.191: segunda etapa del “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica”. Período 2018-2025

Reglamentación del art. 5 de la Ley 27.191

Artículo 16 – La autoridad de aplicación calculará y publicará el grado de cumplimiento de la meta establecida en el art. 5 de la Ley 27.191, de conformidad con lo establecido en el art. 2 del presente anexo.

El Ministerio de Energía y Minería, en el ámbito de sus competencias, podrá adoptar las medidas conducentes a efectos de alcanzar el objetivo previsto por el art. 5 de la Ley 27.191.

Reglamentario del art. 6 de la Ley 27.191

Artículo 17 – A los efectos de la implementación de los beneficios correspondientes a la segunda etapa del “Régimen de fomento de las energías renovables”, es aplicable lo dispuesto en los arts. 1 a 15 del presente anexo, en lo que resulte pertinente, con las respectivas adaptaciones a los plazos, cuotas y porcentajes establecidos en el art. 6 de la Ley 27.191.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas determinará el cupo anual máximo a prever en el presupuesto nacional disponible para otorgar beneficios promocionales, sobre la base de la estimación que anualmente realice la autoridad de aplicación, en función de los proyectos de inversión a desarrollar para alcanzar los objetivos fijados en el art. 8 de la Ley 27.191. Asimismo, previsionará el cupo anual de beneficios promocionales y gestionará su inclusión en la ley de presupuesto del año fiscal siguiente, de acuerdo con lo establecido precedentemente.

ANEXO II - Reglamentación Caps. III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley 27.191

CAPITULO III - Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER)

Artículo 7 – El Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (en adelante “FODER”) se rige por las disposiciones de la Ley 27.191, la presente reglamentación, la normativa de implementación que dicten la autoridad de aplicación y el Comité Ejecutivo, en la esfera de sus competencias, y por el contrato respectivo.

1. Objeto: la aplicación de los bienes fideicomitidos será realizada de conformidad con lo ordenado por la Ley 27.191, la presente reglamentación y la normativa de implementación que dicten la autoridad de aplicación y el Comité Ejecutivo, en la

esfera de sus respectivas competencias, por el contrato respectivo y por las normas aplicables del Código Civil y Comercial de la Nación.

2. La autoridad de aplicación será también parte del contrato de fideicomiso, conforme las funciones que le otorga la Ley 27.191, la presente reglamentación, la normativa de implementación que dicte la autoridad de aplicación, el contrato respectivo y por las normas aplicables del Código Civil y Comercial de la Nación. Serán beneficiarias las personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en la República Argentina comprendidas en el art. 8 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191.

3. Sin reglamentar.

4. Recursos del Fondo:

a) Los recursos provenientes del Tesoro Nacional destinados al FODER que determine la autoridad de aplicación, según se establece en este artículo, se depositarán en una cuenta fiduciaria específica del FODER (la "cuenta de financiamiento") cuyo objetivo específico será el de facilitar la conformación de los instrumentos del FODER, según se establecen en el art. 7, inc. 5, aparts. a), b) y c), de la Ley 27.191, y su reglamentación en este anexo.

La autoridad de aplicación determinará las condiciones para el otorgamiento de financiamiento por parte del FODER, respetando el criterio de asignación prioritaria de fondos en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7, inc. 5, último párrafo, de la Ley 27.191. Los aportes del Tesoro Nacional a ser destinados al FODER se registrarán por las normas siguientes y las que determine la autoridad de aplicación:

i. La autoridad de aplicación deberá comunicar al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con anterioridad al 30 de junio de cada año, los recursos del Tesoro Nacional requeridos para el año siguiente, a los efectos de su inclusión en la ley de presupuesto correspondiente a dicho año.

ii. Los recursos a ser transferidos por el Tesoro Nacional serán calculados por la autoridad de aplicación en función del requerimiento de fondos para dar cumplimiento a las metas anuales de participación de energía de fuentes renovables establecidas por el art. 8 de la Ley 27.191. En ningún caso, el monto anual de dichos recursos será inferior al cincuenta por ciento (50%) del ahorro efectivo en combustibles fósiles debido a la incorporación de fuentes renovables obtenido el año previo, el que será calculado por la autoridad de aplicación.

iii. A tal fin, se considerará la generación de fuente renovable existente y en servicio al finalizar el año anterior, salvo que sea inferior al porcentaje mínimo establecido en el art. 8 de la Ley 27.191 para cada etapa, en cuyo caso se realizará el cálculo sobre la base de dicho valor mínimo.

iv. La autoridad de aplicación establecerá los parámetros y criterios para calcular y documentar el ahorro en combustibles fósiles obtenido por la generación de fuente renovable incorporada en cada año.

v. En el año 2016 los recursos provenientes del Tesoro Nacional a ser destinados al FODER serán de pesos doce mil millones (\$ 12.000.000.000). El monto establecido y todos los montos a ser destinados anualmente por el Tesoro Nacional serán integrados al FODER como aporte en carácter de fiduciante y constituyéndose en consecuencia como fideicomisario del FODER.

b) Un cargo específico de garantía que se regirá por las normas contenidas en la presente reglamentación que se enumeran a continuación y las normas que oportunamente determine la autoridad de aplicación:

i. El cargo será aplicado a los usuarios de energía eléctrica, con excepción de aquellos grandes usuarios comprendidos en el art. 9 de la Ley 27.191 que cumplan con la obligación allí prevista mediante la celebración de contratos directamente con el generador, a través de una distribuidora que la adquiera en su nombre a un generador o con un comercializador o, bien, con la realización de proyectos de autogeneración o cogeneración.

ii. El cargo será destinado exclusivamente a los fines de constituir una cuenta de garantía en el marco del FODER, con el objeto exclusivo de garantizar las obligaciones contractuales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación en los contratos de abastecimiento de energía eléctrica que celebre en los términos de la Ley 27.191, según lo previsto por el art. 7, inc. 5, apart. d), de la Ley 27.191.

iii. El cargo será facturado y percibido por los agentes distribuidores o prestadores del servicio público de distribución o por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), según corresponda, de acuerdo con lo que establezca la autoridad de aplicación, en todos los casos por cuenta y orden del FODER.

iv. Las sumas recaudadas en concepto del cargo deberán ser depositadas y permanecer en una cuenta fiduciaria específica y separada de cualquier otro recurso perteneciente al FODER (la “cuenta de garantía”) y tendrán como único fin servir de garantía efectiva de pago a los contratos suscritos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación con agentes generadores o comercializadores en el marco de la Ley 27.191. Las rentas y frutos que generen los fondos de la cuenta de garantía serán también destinados a la cuenta de garantía.

v. El contrato de fideicomiso y la autoridad de aplicación establecerán las condiciones en las cuales los fondos existentes en la cuenta de garantía constituida por el cargo serán desembolsados y aplicados.

vi. El cargo será calculado y fijado por la autoridad de aplicación en una suma en pesos por megavatio hora (\$/MWh), con un valor mínimo que permita recaudar y tener en disponibilidad una suma suficiente para garantizar, por un plazo mínimo de doce meses, las obligaciones de pago mensuales que surjan de los contratos celebrados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación con agentes generadores bajo la Ley 27.191.

vii. Con la mayor antelación posible, luego de la entrada en vigencia del presente decreto, la autoridad de aplicación determinará el valor del cargo a ser aplicado en forma inmediata al universo de usuarios individualizados en el numeral i) del presente apartado. Con posterioridad, a partir de la celebración de los contratos por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, dicha autoridad revisará periódicamente el valor del cargo para lograr el monto total objetivo de la cuenta de garantía en base a las obligaciones de pago contraídas por obligaciones contractuales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, bajo los contratos de abastecimiento de energía eléctrica celebrados en el marco de la Ley 27.191, con el alcance establecido en el numeral anterior.

c) Se considerarán bienes fideicomitidos el recupero del capital de las financiaciones otorgadas, los montos que el FODER cobre en concepto de intereses, multas, cargos, costos, gastos administrativos, mayores costos impositivos y cualquier otro que el FODER tenga derecho a cobrar en virtud de las financiaciones otorgadas, así como también todos los derechos, garantías y/o seguros que el FODER obtenga de

los beneficiarios y/o terceros, relacionados directa o indirectamente con las financiaciones otorgadas.

d) Se integrarán también como bienes fideicomitidos todos los derechos, garantías y/o seguros que el FODER obtenga en relación directa o indirecta con la titularidad de acciones o participaciones y/o financiamiento en proyectos elegibles.

e) Sin reglamentar.

f) Sin reglamentar.

El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá, en el plazo de treinta días desde la entrada en vigencia del presente decreto, las medidas necesarias para el cumplimiento del inc. 4, apart. a), del art. 7, de este anexo.

Serán considerados además bienes fideicomitidos las contribuciones, subsidios, legados o donaciones que sean aceptados por el FODER, así como cualquier otro derecho o bien que se incorpore por cualquier causa al FODER.

Los recursos obtenidos por el cobro de la penalidad prevista en el art. 11 de la Ley 27.191 y por las penalidades contractuales que paguen los generadores o comercializadores que celebren contratos de abastecimiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, en el marco de lo dispuesto en el presente decreto, se destinarán sin excepción al FODER y se depositarán en la cuenta de financiamiento.

5. Instrumentos: todos los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables que obtengan el certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de energías renovables”, independientemente de que contraten en forma directa con los sujetos obligados en virtud del art. 9 de la Ley 27.191 o a través de comercializadores o con obligaciones contractuales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación, estarán en condiciones de solicitar el otorgamiento de los instrumentos previstos en el art. 7, inc. 5, de la citada ley, integrando el orden de mérito que elaborará el Comité Ejecutivo del FODER para definir la asignación de aquéllos.

a) Sin reglamentar.

b) En caso de que el FODER realice aportes de capital en sociedades que desarrollen proyectos comprendidos en el “Régimen de fomento de las energías renovables” su participación en dichas sociedades y en sus utilidades del proyecto será proporcional al capital suscrito por el FODER.

c) La autoridad de aplicación determinará las condiciones de elegibilidad para que los beneficiarios accedan al instrumento previsto en el art. 7, inc. 5, apart. c), de la Ley 27.191.

d) Las garantías y avales a ser otorgados por el FODER incluirán, mediante la instrumentación que establezca la autoridad de aplicación, la aplicación de los fondos existentes en la cuenta de garantía constituidos según los términos del art. 7, inc. 4, apart. b), del presente anexo.

Instrúyese a la autoridad de aplicación de la ley y del FODER a aprobar los términos y condiciones generales de los instrumentos comprendidos en el art. 7, inc. 5, de la Ley 27.191.

El Comité Ejecutivo privilegiará la inversión de los fondos disponibles en el FODER en función del perfil de riesgo de los proyectos y considerando el criterio de asignación prioritaria en relación con el parámetro del mayor porcentaje de integración del componente nacional incluido en la Ley 27.191, en la forma que establezca la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación establecerá los términos y condiciones bajo los cuales asignará un porcentaje de los fondos de la cuenta de financiamiento del FODER a programas de financiamiento e instrumentos, según se definen en el art. 7, inc. 5, de la Ley 27.191, a favor de proyectos de desarrollo de la cadena de valor de fabricación local de equipos de generación de energía de fuentes renovables, partes o elementos componentes. En este sentido, la autoridad de aplicación podrá apoyarse en convenios de colaboración con el Ministerio de Producción, con otros organismos del sector público nacional con competencia en la materia y con las cámaras empresariales del sector industrial de que se trate y que considere conveniente.

La autoridad de aplicación deberá publicar y dar difusión amplia respecto de la utilización de los instrumentos del FODER y los beneficiarios de dichos instrumentos.

La autoridad de aplicación reglamentará el otorgamiento de las garantías mediante la utilización de los recursos provenientes del art. 7, inc. 4, apart. b), del presente anexo.

Los beneficiarios que reciban un aporte del FODER bajo cualquiera de los instrumentos previstos deberán rendir cuentas ante la autoridad de aplicación y el Comité Ejecutivo. A tal fin, la autoridad de aplicación aprobará el procedimiento de rendición de cuentas a ser aplicado, contando con amplias facultades para requerir de los beneficiarios toda la información que sea razonable a los efectos previstos en la presente reglamentación.

Adicionalmente, los beneficiarios que reciban un aporte del FODER que tenga origen en recursos del Tesoro Nacional deberán rendir cuentas de los mismos según lo previsto por la Ley 24.156.

6. Tratamiento impositivo: sin reglamentar.

7. Autoridad de aplicación: la autoridad de aplicación del FODER es el Ministerio de Energía y Minería, que podrá delegar el ejercicio de sus competencias en una dependencia de rango no inferior a Subsecretaría.

8. Contrato de fideicomiso: el contrato de fideicomiso deberá incluir e instrumentar adecuadamente lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 27.191 y en el presente decreto.

9. Contrato de fideicomiso: sin reglamentar.

CAPITULO IV - Contribución de los usuarios de energía eléctrica al cumplimiento de los objetivos del régimen de fomento

Artículo 8 – El cumplimiento de la obligación de alcanzar los objetivos mínimos establecidos en el art. 8 de la Ley 27.191 deberá efectivizarse mediante el consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables generada por instalaciones localizadas en el territorio de la República Argentina o en su plataforma continental.

La autoridad de aplicación dictará las normas complementarias e interpretativas relativas a las condiciones a las que se sujetará la aplicación de los objetivos de la Ley 27.191 a los usuarios de energía eléctrica no conectados al Sistema Argentino de Interconexión.

Artículo 9 – La obligación impuesta por el art. 9 de la Ley 27.191 a los sujetos allí individualizados podrá cumplirse por cualquiera de las siguientes formas:

- a) Por contratación individual de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables.
- b) Por autogeneración o por cogeneración de fuentes renovables.
- c) Por participación en el mecanismo de compras conjuntas desarrollado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación.

A tales efectos, será aplicable lo previsto en la Ley 27.191, las disposiciones que se enumeran a continuación y las normas que dicte la autoridad de aplicación en tal carácter y en ejercicio de las facultades que le acuerdan los arts. 35 y 36 de la Ley 24.065 y su reglamentación:

1. Disposiciones comunes a todas las formas de cumplimiento:

i. Estarán alcanzados por la obligación del art. 9 de la Ley 27.191 aquellos usuarios que cuenten con uno o múltiples puntos de demanda de energía eléctrica con medidores independientes, todos registrados bajo la misma Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o ante los agentes distribuidores o prestadores del servicio público de distribución si en la sumatoria de todos los puntos de demanda alcancen o superen los 300 kW de potencia media contratada en el año calendario, aun en el caso de que, en todos o algunos de los puntos de demanda considerados individualmente, no alcancen el nivel indicado precedentemente. Dichos usuarios deberán cumplir los objetivos establecidos en el art. 8 de la Ley 27.191, tomando como base la suma total del consumo de energía eléctrica de todos los puntos de demanda registrados bajo su Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

ii. La autoridad de aplicación establecerá el mecanismo por el cual los sujetos obligados cumplirán su objetivo en relación con la demanda base y la demanda excedente, en los casos en que estuvieren alcanzados por lo dispuesto por la Res. 1.281, de fecha 4 de setiembre de 2006, de la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y en tanto dicha norma mantenga su vigencia.

iii. Los sujetos comprendidos en el art. 9 de la Ley 27.191 solamente abonarán, por sobre el precio pactado en sus contratos de abastecimiento de energía renovable, los costos aplicables por servicios de seguridad, calidad y otros auxiliares del sistema, los costos de transporte que correspondan sin perjuicio de los cargos previstos en el inc. 5, apart. vi, de este artículo, aplicables a los sujetos obligados

que ingresen en el mecanismo de compra conjunta. La energía eléctrica adquirida bajo el art. 9 de la Ley 27.191 no estará alcanzada por otros cargos o costos adicionales, incluidos –a modo enunciativo y sin perjuicio de la inclusión de otros cargos dispuesta por la autoridad de aplicación– los cargos en concepto de “sobrecostos transitorios de despacho” (SCTD), “adicional sobrecosto transitorio de despacho” (ASCTD), “sobrecostos combustibles” (SCCOMB), “cargo medio incremental de la demanda excedente” (CMIEE), ni aquéllos que los reemplacen. Tales cargos tampoco serán aplicables para quienes cumplan con las obligaciones previstas en el art. 9 mediante autogeneración o cogeneración a partir de fuentes renovables.

2. Cumplimiento por contratación individual de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables:

i. Los contratos de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, celebrados en el marco de la Ley 27.191 por los sujetos comprendidos en el art. 9 directamente con un generador o a través de una distribuidora que la adquiera en su nombre a un generador o de un comercializador, serán libremente negociados entre las partes, teniendo en cuenta las características de los proyectos de inversión y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada ley, en la presente reglamentación, de los deberes de información y requisitos de administración contemplados en el Cap. IV de los “Procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios”, conforme la Res. S.E. 61, de fecha 29 de abril de 1992, y sus modificatorias, y de la normativa complementaria que dicte la autoridad de aplicación.

ii. Los sujetos obligados que opten por esta forma de cumplimiento deberán manifestar su voluntad en este sentido ante la autoridad de aplicación en los plazos y la forma que ésta determine, con el fin de quedar excluidos del mecanismo de compras conjuntas que desarrollará la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación por instrucción de dicha autoridad.

3. Cumplimiento por autogeneración o cogeneración con energías renovables:

i. Los sujetos comprendidos en el art. 9 de la Ley 27.191 podrán dar cumplimiento a la obligación de cubrir, como mínimo, el porcentaje del total de su consumo propio de energía eléctrica que corresponda en los plazos previstos en el art. 8 de la Ley 27.191, mediante autogeneración o cogeneración de energía eléctrica de fuentes renovables en el marco del Anexo 12 de los “Procedimientos para la programación

de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios”, conforme la Res. S.E. 61/92 y sus modificatorias –no siendo en tal caso aplicables los requisitos de potencia firme allí previstos–, la Res. S.E. 269, de fecha 7 de mayo de 2008, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y/o mediante proyectos de autogeneración o cogeneración de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con instalaciones no interconectadas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en las condiciones a ser definidas por la autoridad de aplicación.

ii. Los sujetos obligados que opten por esta forma de cumplimiento deberán manifestar su voluntad en este sentido ante la autoridad de aplicación en los plazos y la forma que ésta determine, con el fin de quedar excluidos del mecanismo de compras conjuntas que desarrollará la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o la entidad que designe la autoridad de aplicación.

4. Fiscalización del cumplimiento por contratación individual, autogeneración o cogeneración de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables:

i. Con anterioridad al 31 de diciembre de los años 2017, 2019, 2021, 2023 y 2025, en la forma y plazos que establezca la autoridad de aplicación, los sujetos obligados deberán acreditar la suscripción del contrato por el que se aseguren el abastecimiento de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables necesaria para cumplir el objetivo correspondiente a cada período, o bien, presentar el proyecto de autogeneración o cogeneración a desarrollar con dicho fin con la documentación respaldatoria que la autoridad de aplicación determine.

ii. La autoridad de aplicación emitirá la reglamentación correspondiente a los parámetros técnicos de aplicación general que deberán cumplir los contratos y los proyectos de autogeneración y de cogeneración de energía eléctrica presentados a los fines de su idoneidad para asegurar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. En caso de que, sobre la base de dicha reglamentación, la autoridad de aplicación no considere técnicamente idóneos los contratos o proyectos presentados, será aplicable lo dispuesto en el art. 11 del presente anexo.

iii. Anualmente, a partir del 31 de diciembre de 2018 y en los plazos y la forma que establezca la autoridad de aplicación, ésta fiscalizará el cumplimiento efectivo de los objetivos de consumo de cada sujeto obligado en cada una de las etapas fijadas en el art. 8 de la Ley 27.191.

iv. Se considerará cumplido el objetivo si en el total del consumo propio del año fiscalizado se ha cubierto con energía eléctrica de fuente renovable el porcentaje aplicable a cada etapa, independientemente de los consumos mensuales o de períodos inferiores.

5. Cumplimiento por participación en el mecanismo de compras conjuntas desarrollado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación:

i. Los sujetos alcanzados por lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 27.191 podrán dar cumplimiento a la obligación de cubrir como mínimo el ocho por ciento (8%) del total de su consumo propio de energía eléctrica, mediante la compra de energía eléctrica de fuente renovable directamente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación, a través del mecanismo de compra conjunta regulado en este inciso. A tales efectos, quienes opten por cumplir con la obligación mediante la contratación individual de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, o mediante autogeneración o cogeneración, en los términos establecidos en los incs. 2 y 3 del presente artículo, deberán manifestar en forma expresa su decisión ante la autoridad de aplicación en la forma y en los plazos que ésta determine. Los sujetos alcanzados por la obligación que no manifiesten expresamente la decisión mencionada precedentemente quedarán automáticamente incluidos en el mecanismo de compra conjunta de energía eléctrica proveniente de fuente renovable que llevará adelante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación, de conformidad con lo establecido en el presente inciso.

ii. El mecanismo de compra conjunta previsto en este inciso, consiste en la adquisición por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables necesaria para cumplir con los objetivos fijados en el art. 8 de la Ley 27.191 por parte de los sujetos obligados individualizados en el art. 9 de la citada ley que queden incluidos en dicho mecanismo, mediante la celebración de contratos con generadores o comercializadores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

iii. La incorporación de los sujetos obligados en el mecanismo de compra conjunta, y el pago del costo de la energía eléctrica de fuente renovable oportunamente consumida por dichos sujetos, será suficiente para tener por cumplida la obligación establecida en el art. 9 de la Ley 27.191.

iv. El mecanismo de compra conjunta se llevará a cabo con el fin de alcanzar el objetivo fijado en el art. 8 de la Ley 27.191 para el 31 de diciembre de 2017. Posteriormente, la autoridad de aplicación evaluará la conveniencia de reproducir dicho mecanismo y, en su caso, el alcance de éste, para el cumplimiento de los objetivos fijados para cada una de las restantes etapas contempladas en el cronograma de incremento gradual de incorporación de energía eléctrica de fuentes renovables establecido en el art. 8 de la Ley 27.191.

v. La autoridad de aplicación aprobará los términos y condiciones del mecanismo de compra conjunta a ejecutar por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación. Dichos términos y condiciones se ajustarán a los mismos lineamientos establecidos en el art. 12 de la Ley 27.191 y de esta reglamentación para las compras de los sujetos comprendidos en dicho artículo, sin perjuicio de la aplicación del límite de precio, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente.

vi. La adquisición realizada a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o al ente que designe la autoridad de aplicación por los sujetos obligados mediante el mecanismo de compra conjunta quedará alcanzada por el límite de precio establecido en el art. 9, segundo párrafo, de la Ley 27.191. Dentro de dicho límite, se aplicará un cargo en concepto de costos de comercialización, que incluirá una valoración de riesgos de largo plazo asumidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, que será aplicado sobre el precio promedio de adquisición y cuyo valor será definido por la autoridad de aplicación. Adicionalmente, sin estar sujeto al límite indicado precedentemente, se aplicará un cargo en concepto de gastos administrativos que será definido por la autoridad de aplicación.

vii. El precio del megavatio hora que abonarán los sujetos obligados incluidos en el mecanismo de compra conjunta será definido por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación a prorrata del monto total al que ascienda la sumatoria de los contratos celebrados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o el ente que designe la autoridad de aplicación con generadores en el marco de este procedimiento.

viii. Vencido el plazo que la autoridad de aplicación establezca para que los sujetos alcanzados por lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 27.191 manifiesten su decisión de quedar excluidos del mecanismo de compra conjunta regulado en este inciso, la

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que la autoridad de aplicación determine, convocará a licitación pública con el objeto de celebrar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables necesarios para abastecer a la demanda de grandes usuarios que quedaron incluidos en el mecanismo de compra conjunta. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, podrá convocar a una licitación independiente y/o incluir las demandas de los grandes usuarios que quedaron comprendidos en el mecanismo de compra conjunta en las licitaciones que convoque en el marco de lo previsto en el art. 12 del presente anexo.

ix. La celebración de los contratos por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación con los generadores o comercializadores, con el fin de adquirir el abastecimiento de energía eléctrica que sea demandada por los sujetos comprendidos en el art. 9 de la Ley 27.191 incluidos en el mecanismo de compra conjunta, será efectuada de conformidad con lo previsto en el art. 12 del presente anexo.

Artículo 10 – De conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley 27.191, los plazos máximos de vigencia del contrato de suministro establecido en el art. 1177 del Código Civil y Comercial de la Nación, y del pacto de preferencia establecido en el párrafo primero del art. 1182 del citado Código, no son aplicables a los contratos de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables suscriptos por los grandes usuarios y por las grandes demandas comprendidos en el art. 9 de la citada ley, por los generadores que utilicen fuentes renovables de energía, por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o por el ente que designe la autoridad de aplicación y por los comercializadores.

Artículo 11 – Los incumplimientos de la obligación prevista en el art. 9 de la Ley 27.191 estarán sujetos a lo previsto en dicha ley y a las normas que se enumeran a continuación:

1. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados, incluidos en los incs. 2 y 3 del art. 9 de este anexo, de la acreditación de la suscripción del contrato o de la presentación del proyecto de autogeneración o cogeneración, o bien, la decisión de la autoridad de aplicación sobre la falta de idoneidad técnica del contrato o del proyecto de autogeneración o cogeneración presentados para asegurar el

cumplimiento de las obligaciones correspondientes, previa realización de un procedimiento a ser determinado por la autoridad de aplicación que garantice el debido respeto del derecho de defensa del interesado, dará lugar a la aplicación de la penalidad prevista en el art. 11 de la Ley 27.191. Dicha penalidad se calculará teniendo en cuenta la cantidad de megavatios hora necesarios para alcanzar el objetivo establecido para la etapa correspondiente, tomando como base la demanda del sujeto obligado en el año calendario anterior a aquél en que debió cumplir con lo establecido en el art. 9, inc. 4, apart. i, del presente anexo.

2. Si al realizar la fiscalización prevista en el art. 9, inc. 4, apart. iii, de este anexo, a los sujetos incursos en el supuesto previsto en el párrafo anterior, se verificara que no han cumplido en forma efectiva el objetivo de consumo mínimo que corresponda se recalculará el monto de la penalidad tomando como base la demanda del sujeto obligado durante el año fiscalizado, siempre que sea mayor a la del año anterior. En caso de ser menor, se mantendrá el monto original de la penalidad. La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento aplicable en el supuesto contemplado en el presente apartado.

3. Los sujetos obligados que cumplan con lo dispuesto en el art. 9, inc. 4, apart. i, de este anexo, pero que, al efectuarse la fiscalización prevista en el apart. iii del citado inciso, no alcancen el cumplimiento efectivo de la obligación de consumo mínimo correspondiente, serán penalizados con la aplicación de la penalidad prevista en el art. 11 de la Ley 27.191 determinada por la cantidad de megavatios hora de energía de fuentes renovables faltantes para cumplir con la obligación.

4. La penalidad prevista en el art. 11 de la Ley 27.191 será calculada y determinada por la autoridad de aplicación con base en la reglamentación que expida oportunamente.

5. La autoridad de aplicación determinará al 31 de enero de cada año el valor correspondiente al promedio ponderado del año anterior, para ser aplicado para el cálculo de las penalidades del año en curso.

6. La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento a seguir con carácter previo a la aplicación de la penalidad, resguardando debidamente el derecho de defensa del sujeto obligado.

7. El pago de la penalidad se efectivizará de acuerdo con el procedimiento y plazos que establezca la autoridad de aplicación.

8. El acto administrativo por el cual se aplica la penalidad goza de ejecutoriedad en los términos del art. 12 de la Ley 19.549.

9. Los sujetos obligados gozarán de una tolerancia del diez por ciento (10%) por año en el cumplimiento efectivo de la obligación correspondiente a cada etapa, que podrá ser compensado al año siguiente en que se produjere. Si en el año siguiente al del incumplimiento parcial no se lograre cumplir con el consumo mínimo establecido para ese año más la compensación del faltante del año anterior, se aplicará la penalidad correspondiente.

10. En todos los casos en que la autoridad de aplicación fiscalice un faltante superior al diez por ciento (10%) del consumo obligatorio de energía eléctrica de fuentes renovables en un año, sujetará al diez por ciento (10%) al mecanismo compensatorio establecido en el párrafo anterior y aplicará la penalidad correspondiente sobre el porcentaje que exceda el diez por ciento (10%) en el año inmediato siguiente al que se produjo el incumplimiento.

Artículo 12 – La autoridad de aplicación establecerá los plazos en que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, convocará a licitación pública con el objeto de celebrar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables necesarios para abastecer a la demanda comprendida en el art. 12 de la Ley 27.191.

Los contratos celebrados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación con los generadores, en el marco de lo dispuesto en este artículo, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

1. El procedimiento de contratación será público, competitivo y expeditivo, con reglas de aplicación general aprobadas previamente por la autoridad de aplicación que prevean plazos de adjudicación ciertos y breves y garanticen la más amplia concurrencia.

2. Los procedimientos competitivos podrán prever una asignación mínima o cupo por tecnología, buscando diversificar las fuentes renovables de aprovisionamiento entre las distintas tecnologías aptas técnicamente para un abastecimiento de escala comercial, procurando también la diversificación geográfica de los proyectos.

3. Dentro de cada tecnología las adjudicaciones de los contratos deberán favorecer las ofertas con el precio menos oneroso y el plazo de instalación más breve.

4. El plazo de los contratos será establecido por la autoridad de aplicación.
5. El precio podrá ser establecido en moneda dólares estadounidenses (u\$s) siguiendo los lineamientos que dicte la autoridad de aplicación.
6. El precio de los contratos destinados a abastecer la demanda no comprendida en el art. 9 de la Ley 27.191 será trasladado al precio de adquisición de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que abona dicha demanda. El precio de los contratos destinados a abastecer la demanda que haya optado por el mecanismo de compra conjunta será trasladado a dicho universo de usuarios de acuerdo con lo establecido en el art. 9, inc. 5, aparts. vi y vii, del presente anexo.
7. Se podrá prever el arbitraje comercial como mecanismo de resolución de conflictos entre el vendedor y el comprador.
8. Podrán establecerse garantías al generador otorgadas por el FODER.

Independientemente de la adquisición de energía eléctrica efectuada mediante los contratos de abastecimiento contemplados en este artículo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, adquirirá hasta un máximo del diez por ciento (10%) de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables que los generadores beneficiarios del régimen de fomento de las energías renovables generen en exceso de los volúmenes de energía eléctrica comprometidos en los contratos que hubieren celebrado, cualquiera sea su contraparte. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente que designe la autoridad de aplicación, abonará por la energía eléctrica adquirida el menor precio vigente en el Mercado para la tecnología correspondiente, considerando la totalidad de los contratos de abastecimiento en ejecución en ese momento. La compra prevista en este párrafo se realizará siempre que el generador no opte por venderla a otro generador, a otro usuario, a un comercializador o al Mercado spot. La energía eléctrica adquirida por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o por el ente que designe la autoridad de aplicación, en el marco de lo dispuesto en este párrafo será destinada al cumplimiento de los objetivos fijados en el art. 8 de la Ley 27.191 por parte de toda la demanda de potencia menor a 300 kW, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la ley citada, y su pago estará garantizado por el FODER en los mismos términos en que serán garantizados los contratos celebrados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista

Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) o por el ente que designe la autoridad de aplicación con los generadores en el marco de lo dispuesto en este artículo.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, los usuarios no incluidos en el art. 9 de la Ley 27.191 estarán habilitados a cumplir en forma individual con los objetivos de consumo de energía eléctrica de fuente renovable mediante la modalidad de contratación en el Mercado, por autogeneración y/o cogeneración en los términos y condiciones a ser establecidos por la autoridad de aplicación, los entes reguladores nacionales y provinciales del servicio eléctrico, los prestadores del servicio público de distribución y los agentes distribuidores, en la esfera de sus competencias.

A los efectos del cálculo de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables generada en el marco de los contratos de abastecimiento existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.191, deberá considerarse toda la generación derivada de las fuentes enumeradas en el art. 4 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191.

La autoridad de aplicación establecerá las condiciones en que la energía eléctrica de fuentes renovables, proveniente de los contratos de abastecimiento existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.191, se asignará al cumplimiento del objetivo de incorporación de energías renovables por parte de la demanda de potencia menor a 300 kW en concordancia con lo establecido en los arts. 8 y 12 de la citada ley.

CAPITULO V - Incrementos fiscales

Artículo 13 – Los beneficiarios del “Régimen de fomento de las energías renovables” y los sujetos alcanzados por el art. 9 de la Ley 27.191 podrán negociar libremente el traslado, al precio pactado en los contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados entre ellos, de los mayores costos derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidos con posterioridad a la celebración de dichos contratos.

En el marco de los contratos celebrados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o por el ente designado por la autoridad de aplicación, a los que se refiere el segundo párrafo del art. 13 de la Ley 27.191, se entenderán como incrementos fiscales cubiertos por esta última disposición a los que resulten de:

- a) Incremento de impuestos, tasas, contribuciones o cargos generales o no específicos o no exclusivos de la actividad existentes, por ampliación de base, modificación de exenciones y/o desgravaciones y/o incremento de alícuotas; y
- b) creación de nuevos impuestos, tasas, contribuciones o cargos generales o no específicos o no exclusivos de la actividad.

Queda excluido de lo dispuesto en el art. 13, segundo párrafo, de la Ley 27.191:

- a) La eliminación de la exención de los tributos contemplados en el art. 14 de la citada ley, como consecuencia del vencimiento del plazo de vigencia del beneficio establecido en el art. 16 de la misma norma;
- b) la creación de tributos específicos, cánones o regalías luego del vencimiento del plazo fijado en el art. 17, primer párrafo, de la Ley 27.191, en las jurisdicciones que hubieren adherido a las Leyes 26.190 y 27.191; y
- c) la creación de tributos específicos, cánones o regalías, en cualquier momento, en las jurisdicciones que no hubieren adherido a las Leyes 26.190 y 27.191. Para los casos contemplados en el segundo párrafo del art. 13 de la Ley 27.191, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), o el ente designado por la autoridad de aplicación que sea parte en el contrato, determinará el nuevo precio de la energía suministrada, teniendo en cuenta la información entregada por el beneficiario y los análisis realizados por los órganos competentes respecto del verdadero impacto que el incremento de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires produzca sobre la estructura de costos del beneficiario.

La solicitud del reconocimiento del nuevo precio deberá realizarse antes del último día hábil del segundo mes siguiente al que entró en vigencia la norma que produce el incremento que motiva dicha solicitud. El vencimiento del plazo indicado sin que se hubiere efectuado el pedido y acompañado la información y documentación correspondientes hará caducar automáticamente el derecho a solicitar la determinación de un nuevo precio por ese incremento.

CAPITULO VI - Régimen de importaciones

Artículo 14 – La exención del pago de los derechos de importación fijada por el art. 14 de la Ley 27.191 se aplicará para cada beneficiario desde la obtención del certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de energías renovables”, en el cual se deberá individualizar los bienes de capital, equipos especiales, partes o

elementos componentes de dichos bienes y los insumos determinados y certificados por la autoridad de aplicación que fueren necesarios para la ejecución del proyecto, con su identificación a través de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), determinando la cantidad para cada caso. Este beneficio sólo es aplicable para los bienes importados en estado nuevo.

Previo a autorizar el libramiento a plaza de la mercadería, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), a través de la Dirección General de Aduanas exigirá la presentación del respectivo certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de energías renovables” emitido por la autoridad de aplicación, a fin de hacer efectiva la exención del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios y del impuesto al valor agregado (I.V.A.) que grave las importaciones definitivas de los bienes.

La autoridad de aplicación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), por resolución conjunta, reglamentarán la forma de declarar por medios electrónicos el certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de energías renovables”.

Los bienes importados con las exenciones previstas por el art. 14 de la Ley 27.191 estarán sujetos a la respectiva comprobación de destino por todo el plazo del proyecto, incluida la operación, no pudiendo el desarrollador del proyecto disponer de ellos ni dar un destino distinto del indicado durante ese período. El cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo será verificado por la autoridad de aplicación.

En caso de que el proyecto no comience su operación comercial en el plazo establecido al efecto en el acto de aprobación o en la prórroga que fundadamente se otorgue, el beneficiario deberá abonar los derechos, impuestos y gravámenes de los que fuera eximido por aplicación del art. 14 de la Ley 27.191. La autoridad de aplicación pondrá en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) el incumplimiento a los efectos de que proceda a exigir el pago de los tributos oportunamente dispensados.

Previo a autorizar la importación de bienes con los beneficios otorgados por el art. 14 de la Ley 27.191, la autoridad de aplicación deberá constatar que no exista producción nacional de los bienes a importar, de acuerdo con el procedimiento que se fije al efecto. A tales fines, se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 9, inc. 6, del Anexo I del presente decreto.

La exención prevista en el último párrafo del art. 14 de la Ley 27.191 sólo será aplicable cuando el importador sea el destinatario del bien a importar, con el fin de incorporarlo a su proceso industrial, sea como bien de capital o como parte o pieza de los bienes que produce y comercializa. El sujeto interesado en obtener el beneficio deberá presentar ante la autoridad de aplicación el detalle de los bienes que prevea importar con el beneficio mencionado, junto con la descripción del proyecto industrial al que se incorporarán dichos bienes. La autoridad de aplicación evaluará el proyecto y resolverá fundadamente sobre el otorgamiento del beneficio, detallando en el acto administrativo los bienes sobre los que se otorga el beneficio con su identificación a través de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), determinando su cantidad. Serán aplicables las disposiciones del presente artículo, respecto de los requisitos para gozar del beneficio y su control, considerándose al acto administrativo que lo otorga como equivalente, a estos efectos, al certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de energías renovables”.

La autoridad de aplicación celebrará los convenios de colaboración con el Ministerio de Producción, con otros organismos del sector público nacional con competencia en la materia y con las cámaras empresariales del sector industrial de que se trate y que considere convenientes, para establecer los mecanismos de verificación y control necesarios para el cumplimiento de lo establecido en este artículo.

Artículo 15 – Sin reglamentar.

Artículo 16 – Sin reglamentar.

CAPITULO VII - Acceso y utilización de fuentes renovables de energía

Artículo 17 – El acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el art. 4 de la Ley 26.190, modificada por la Ley 27.191, por parte de los proyectos que obtengan el certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de energías renovables”, no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025, en las jurisdicciones que adhieran a las mencionadas leyes.

Los tributos específicos, cánones o regalías existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.191, aplicables a proyectos no incluidos en el “Régimen de fomento de las energías renovables”, mantendrán su vigencia sin perjuicio de la

atribución de las autoridades competentes respectivas para disponer su modificación o eliminación.

CAPITULO VIII - Energía eléctrica proveniente de recursos renovables intermitentes

Artículo 18 – El despacho de la energía eléctrica proveniente de recursos renovables intermitentes se regirá por lo previsto por el art. 18 de la Ley 27.191, por los “Procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios”, conforme la Res. S.E. 61/92 y sus modif., y por las estipulaciones específicas que determinen la autoridad de aplicación y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).

Artículo 19 – La autoridad de aplicación y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), en las esferas de sus respectivas competencias, determinarán los niveles de reserva requeridos en función de las necesidades operativas y de despacho. La autoridad de aplicación podrá establecer la remuneración de las necesidades adicionales de reserva en los términos de los Anexos 23 y 36 de los “Procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios”, conforme la Res. S.E. 61/92 y sus modif., o mediante las normas complementarias y modificatorias que se determinen. Todos los costos derivados del aseguramiento de la reserva de potencia asociada a la totalidad de los emprendimientos de generación renovable desarrollados en el marco del régimen de fomento de las energías renovables – incluyendo la remuneración aludida precedentemente– serán absorbidos por el sistema.

CAPITULO IX - Cláusulas complementarias

Artículo 20 – La autoridad de aplicación establecerá la modalidad a ser implementada a los efectos de que las ofertas de generación de energía eléctrica de fuente renovable tengan la mayor difusión posible.

Artículo 21 – Sin reglamentar.